

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL JUZGADO VEINTIOCHO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

I. OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Decidir la acción de tutela promovida por **ARNALDO JÉSUS LLANO** en contra de las sociedades **C&K ACCIÓN Y GESTIÓN S.A.S**, **ICARO GESTIÓN DE PERSONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN** y **H&A ACCIÓN Y GESTIÓN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN**, por la presunta vulneración de su derecho fundamental a la petición.

II. HECHOS

El accionante indicó que el 16 de diciembre de 2020, radicó derecho de petición en los correos electrónicos de las sociedades accionadas, en donde solicitó la remisión de diferente documentación relacionada con su historial laboral; frente a las cuales recibió respuestas incompletas. En esa medida, solicitó el amparo de su derecho fundamental y que en consecuencia, se ordene a las accionadas a que brinden respuesta de manera clara, concisa y de fondo respecto de su solicitud.

III. ACTUACIÓN PROCESAL Y RESPUESTA

El 5 de febrero del 2021, se admitió la tutela y se ordenó correr traslado de la demanda y sus anexos a las entidades accionadas, acto que se surtió con correos electrónicos de la misma fecha. Al respecto no se recibió respuesta alguna por parte de la sociedad H&A Acción y Gestión S.A.S.

Por su parte, la accionada C&K Acción y Gestión S.A.S. en respuesta remitida al llamado que se le hiciera para que ejerciera su derecho a la contradicción y defensa, señaló que i) mediante oficio del 10 de febrero de 2021, se complementó la respuesta que había sido dada previamente al accionante, la cual fue remitida al correo electrónico serranovidalgomez.asociados@gmail.com, y con la cual se brinda una respuesta total y completa frente a lo peticionado.

Finalmente, el liquidador principal de la sociedad Icaro Gestión de Personal S.A.S. en Liquidación, manifestó en su respuesta que respecto a la remisión de los “*actos administrativos que la habilitaban como empresa de servicios temporales*”, que ésta información no es posible remitirla en atención a que esa sociedad nunca tuvo esta condición y por ende, tales actos administrativos no existen; de igual forma, adjuntó junto a su respuesta, un oficio por medio del cual se amplía la respuesta ofrecida al accionante y por medio de la cual, se le comunica y aclara lo aquí expuesto. En esa medida, solicitaron desestimar las pretensiones realizadas por el accionante.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

La tutela es un instrumento jurídico confiado por la Constitución a los jueces, cuya justificación se contrae a brindar a quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos fundamentales que estima han sido burlados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares de manera excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines esenciales del Estado, el cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Política.

4.1. Problema Jurídico:

Compete establecer si en este caso, las sociedades accionadas C&K ACCIÓN Y GESTIÓN S.A.S, ICARO GESTIÓN DE PERSONAL S.A.S. EN

LIQUIDACIÓN y H&A ACCIÓN Y GESTIÓN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, vulneraron el derecho de petición del accionante.

4.2. Procedibilidad

• Legitimación Activa

De conformidad con el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser ejercida i) directamente por la persona afectada o a través de representante, ii) por el Defensor del Pueblo y los personeros municipales, iii) mediante agencia oficiosa cuando el titular de los derechos fundamentales no está en condiciones de promover su propia defensa, circunstancia que debe manifestarse en la solicitud.

En el presente evento, se satisface la primera de las posibilidades dado que el accionante **ARNALDO JÉSUS SOTO LLANO**, actúa a nombre propio en defensa de su derecho fundamental de petición, por ello se encuentra legitimado para actuar.

• Legitimación Pasiva

Según lo establecido en los artículos 1 y 5° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier acción u omisión en que incurra una autoridad pública, y los particulares en algunos casos.

En sentencia T037 de 2018, la Corte Constitucional indicó al respecto que: *“El ya referenciado artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela será ejercida contra (i) cualquier autoridad pública o (ii) excepcionalmente particulares, siempre que estos últimos estén a cargo de la prestación de un servicio público, su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o el peticionario se encuentre en condición de subordinación o indefensión.”*

De tal suerte, teniendo en cuenta que el accionante requiere información atinente a su historial laboral que resulta estar ligado

claramente con sus derechos laborales, por este motivo se encuentra acreditada la legitimidad en la causa por pasiva respecto de las empresas accionadas.

- **Inmediatez**

La acción de tutela fue avocada en esta ciudad el 5 de febrero de 2021, mientras que el derecho de petición que se aduce vulnerado fue presentado por el accionante, el 16 de diciembre de 2020. Así las cosas, se evidencia que la acción de tutela fue interpuesta en un término razonable que cumple con el requisito de inmediatez.

- **Subsidiariedad**

A voces del artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela *"solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable"*. Disposición desarrollada por el artículo sexto del Decreto 2591 de 1991, que ratifica la procedencia de la acción de tutela cuando las vías ordinarias no tengan cabida o cuando no resulten idóneas para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable.

En este caso, pretende el accionante la protección del derecho de petición, prerrogativa fundamental que puede ser garantizado por medio de acción de tutela, porque en el ordenamiento interno, no existe otro mecanismo de protección que resulte ser idóneo ni eficaz para conseguir tal fin.

4.3 Caso Concreto

El artículo 23 de la Constitución Política prevé, que, toda persona tiene derecho a presentar *"peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales"*.

El derecho de petición¹ es, además de un derecho fundamental *per se*, una manifestación directa de la facultad de acceso a la información que le asiste a toda persona (art. 20 Const.), así como un medio para lograr la satisfacción de otros derechos, como la igualdad, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, entre otros.

En consecuencia, toda persona puede elevar ante las autoridades públicas y organizaciones privadas, en desarrollo de derechos fundamentales, solicitudes frente a asuntos, tanto de interés general como particular, sobre las cuales se le debe responder en forma oportuna y cabal, según lo dispuesto normativamente.

La respuesta puede o no satisfacer los intereses de quien ha elevado la petición, en el sentido de acceder o no a sus pretensiones, pero siempre debe ser una contestación que permita al peticionario conocer, frente al asunto planteado, cuál es la situación y la disposición o criterio del ente respectivo.

Así, se ha advertido que se satisface este derecho cuando se emiten y reciben respuestas que abarcan en forma sustancial y resuelven, en lo procedente, la materia objeto de solicitud, independientemente del sentido. De manera que no puede entenderse vulnerado el derecho simplemente porque la contestación dada al peticionario dentro de los términos dispuestos sea negativa, pues si efectivamente atiende de fondo el asunto inquirido, se ha satisfecho tal derecho de petición.

Frente a las características esenciales del derecho de petición, cuyo núcleo cardinal se halla en la resolución y contestación cabal y oportuna de la cuestión averiguada, ha reiterado la Corte Constitucional²:

“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a

¹ T-099/2014

² T- 249 de febrero 27 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares³; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición⁴ pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa⁵; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder;⁶ y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.”

Dentro de este contexto, es claro que el derecho de petición no solo envuelve la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y los particulares, en los casos señalados por la ley y jurisprudencialmente desarrollados, y efectivamente a obtener oportuna, clara, precisa y congruente respuesta de fondo, sino que es también garantía de transparencia. La renuencia a contestar de tal manera conlleva, en consecuencia, a la vulneración del derecho de petición⁷.

En el caso concreto, de las pruebas remitidas por la parte actora se advierte que el accionante radicó una petición ante las entidades accionadas del 16 de diciembre de 2020, dirigida a obtener copia de contratos laborales, comprobantes de nómina, contratos comerciales y otros, generados en desarrollo de su contrato laboral.

Frente a lo anterior, se observa que tanto la sociedad C&K Acción y Gestión S.A.S como ICARO Gestión de Personal S.A.S., allegaron respuestas

³ T- 695 de agosto 13 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.

⁴ T-1104 de diciembre 5 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

⁵ T-294 de junio 17 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

⁶ T-219 de febrero 22 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.

⁷ T-077 de febrero 11 de 2010, M.P. Nilson Pinilla.

en donde se observa que una vez revisado el escrito de tutela, se procedió a complementar la información que fuere brindada en respuestas precedentes, con las cuales, se advierte que se ha dado una respuesta de fondo y completa a la solicitud del accionante.

Es por esto, que en el presente caso al evidenciar que la gestión realizada por estas sociedades accionadas responde a lo solicitado, deberá negarse la acción de tutela por la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado.

Lo anterior es así, pues se evidencia que en efecto, las accionadas realizaron las acciones necesarias para hacer cesar la vulneración del derecho de petición y demás derechos incoados por el solicitante, toda vez que ha procedido a resolver de fondo la solicitud presentada, y por consiguiente, resulta del caso reconocer, que nos encontramos frente a lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha denominado un hecho superado. Al respecto se señaló:

“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más

apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto que, la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.”-8.

Y en el presente caso se habla de un hecho superado, porque dentro de la contestación recibida y remitida por las entidades accionadas al requerimiento que se le hiciera, se constata que se ha resuelto la petición elevada por la parte actora y se ha procedido a remitir respuesta a la petición presentada por el accionante.

Esta situación hace que la vulneración al derecho fundamental que inicialmente había dado motivo a interponer esta acción de tutela haya sido superada, razón por la cual habrá de negarse la acción constitucional, siendo del caso recordar que sólo si la solicitud no es atendida, surge la afectación de los derechos y por ende la posibilidad de acudir a la acción especial y excepcional de la tutela, para que el juez constitucional restablezca la garantía vulnerada y si de lo que se trata es de no estar conforme con la respuesta obtenida, ello escapa a las facultades otorgadas al juez de tutela, pues está obligado al restablecimiento de los derechos pero no a intervenir en la definición del asunto o a indicar el sentido de la respuesta.

No obstante, esta situación no es posible predicarla de parte de la empresa H&A Acción y Gestión S.A.S. en Liquidación, quien decidió guardar silencio al llamado que se le hiciera en respeto de su derecho a la contradicción y la defensa; en esa medida y respecto a lo señalado por parte del accionante, deberá darse aplicación a la disposición contenida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 199, en cual reza: *“Artículo 20. Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.”*

⁸ Cfr. Sentencia T-308 de 2003.

Así las cosas, se observa que a la solicitud de documentación que realizare el accionante, se emitió respuesta por parte de esta sociedad, quien le indicó que *“La empresa no cuenta con información laboral o comercial conforme a lo peticionado; por encontrarse en proceso de liquidación y en razón a que su operación comercial se cerró hace más de cinco años.”*

De tal suerte, advirtiéndose que la empresa accionada emitió una respuesta superficial orientada a ignorar la petición documental del accionante, se advierte de forma clara que el derecho de petición presentado por el accionante, no obtuvo una respuesta clara, concisa y de fondo, con lo cual se permite concluir que respecto de esta sociedad, si se está vulnerando el derecho de petición del accionante, quien en todo caso y a pesar de la condición actual de la empresa que se encuentra en liquidación, cuenta con la posibilidad de obtener la información que requiera y que debió ser preservada por la compañía objeto de acción.

En consecuencia, se ordenará al representante legal y/o liquidador de H&A Acción y Gestión S.A.S. en Liquidación, o quien haga sus veces que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta decisión, por intermedio de los funcionarios correspondientes, resuelva de fondo la solicitud elevada por el quejoso desde el pasado 16 de diciembre, informándole lo resuelto al correo electrónico registrado en su escrito de petición.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTIOCHO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

RESUELVE

PRIMERO. - **NEGAR** por haberse configurado el fenómeno de hecho superado, el amparo del derecho fundamental de petición invocado por el señor **ARNALDO JÉSUS SOTO LLANO** en contra de las sociedades **C&K**

ACCIÓN Y GESTIÓN S.A.S e ICARO GESTIÓN DE PERSONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO. - CONCEDER en favor de **ARNALDO JÉSUS SOTO LLANO**, el amparo de su derecho de petición vulnerado por **H&A ACCIÓN Y GESTIÓN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN**, según se indicó.

TERCERO. - ORDENAR al representante legal y/o liquidador de **H&A ACCIÓN Y GESTIÓN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN**, o quien haga sus veces que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta decisión, por intermedio de los funcionarios correspondientes, resuelva de fondo la solicitud elevada, informándole lo resuelto al lugar de notificación registrado en su escrito de petición.

CUARTO. - NOTIFICAR la sentencia de acuerdo con las previsiones del Art 30 del Decreto 2591 de 1991, en el evento de que no sea impugnada, remitir la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

CATALINA RIOS PENUELA

JUEZ MUNICIPAL

JUZGADO 028 PENAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO

MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**c2ec1f3d893394e1ddeb628cc3cbc883bebe3812d7f9de32035b8472a
13528b2**

Documento generado en 16/02/2021 07:47:25 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>